

PLAZA PUBLICA

La Amnistía en Guerrero Marcha de Iguala al D.F. Torturas a Presos Políticos

Por MIGUEL ANGEL
GRANADOS CHAPA

Según me lo describen, Rafael Ariztegui es un joven profesor de matemáticas que mide alrededor de un metro noventa centímetros. Catedrático en la Universidad Autónoma de Guerrero, cuando hace unos meses fue

aprehendido, sin causa alguna, como parte de la batida general que ha emprendido el gobernador Figueroa contra esa institución, fue fácil encontrar el modo de torturarlo: bastó ponerlo dentro de una celda charra, que tal vez llegara a 1.75 de altura, para que Ariztegui no pudiera nunca permanecer erguido. Siempre que intentaba ponerse de pie, tenía que inclinar la cabeza, lo suficiente para no golpear con el techo bajo el cual estaba apandado.

No sólo eso. Cuando antes fue detenido, se le produjo una fractura en uno de los fémures. Se le mantuvo sin atención médica durante semanas, al grado de que ahora rengueará para siempre. Por añadidura, sabedores quienes lo capturaron del dolor intenso que por la fractura misma padeció en la pierna, se turnaban para torcércela.

¿Cuál había sido el delito de éste profesor de matemáticas? Ninguno que procesalmente le hubiera podido ser comprobado. Sin embargo, es reo de un crimen político imperdonable en Guerrero, que es pertenecer a la universidad y estar, por lo mismo, enfrentado al gobernador, no por decisión de la casa universitaria sino del propio zar de los transportes públicos.

Hoy, Ariztegui está libre, después de padecer el cautiverio al que nos referimos. Se le había capturado sólo para poder presentar su posterior liberación como un gesto de buena voluntad del gobernador hacia la universidad. Se trató de un intento frustrado, por lo obvio, pues en Guerrero y fuera de la entidad todo el mundo sabe de la enemiga que ejerce Figueroa contra la UAG, a la que considera centro de subversión.

Renente a seguir al gobierno federal en su política de amnistía, el gobernador de Guerrero ha buscado falsear los hechos, presentando como liberados, por una parte, a quienes son agentes suyos, y por otro lado a personas a las que se captura o recaptura sin causa, para el solo efecto de que sus nombres aparezcan en las listas de los beneficiados por una amnistía que así resulta torcida.

Justamente para demandar que termine esa falsificación, autoridades, profesores y estudiantes de la universidad guerrerense se proponen realizar, mañana miércoles, una marcha desde la ciudad de Iguala hasta esta capital. Buscan de esta manera llamar la atención nacional sobre las reticencias de Figueroa a practicar una política de perdón y olvido como la que, en su ámbito, ha querido instaurar el Presidente López Portillo. Otro de los objetivos de esta marcha será, también, desenmascarar el manejo político que de la propia amnistía está queriendo hacer el gobernador, frente a la institución universitaria.

En efecto, una de las metas de los sectores universitarios en Guerrero es conseguir que salga libre Eloy Cisneros Guillén, el director de la preparatoria de Ometepec que está procesado por secuestro y homicidio sobre bases muy endebles. Estos incluyen el testimonio falso de personas que compraron su libertad incriminándolo sin fundamento.

Cisneros Guillén se ha convertido en un símbolo. Se le torturó tan cruelmente, que perdió para siempre el sentido del oído, y se le mantuvo largamente incomunicado en Ometepec. Trasladado a Acapulco, se le recluyó en una celda singularmente apta para el maltrato. Un temblor reciente la agrietó de tal modo que el piso está abierto y a través de él se puede apreciar con toda claridad lo que ocurre en la planta inferior, lo que lejos de ser una indicación de comodidad, por la vista que desde allí se tiene, es señal de lo riesgoso de la situación, aún física, del profesor Cisneros.

La libertad de éste tiene un precio, según ha permitido saber el gobernador. Con intención que pudiera parecer socarrona, de no resultar una gran interferencia en los asuntos internos de la universidad, el gobernador busca obligar al Consejo Universitario a que autorice la inscripción de los famosos doce ex guerrilleros, que en realidad son agentes policíacos, y a los que en un golpe efectista se liberó hace unos meses, antes de hacerlos miembros del Partido Socialista de los Trabajadores, según hemos podido explicar en este mismo lugar.

También se ha condicionado el incremento del subsidio local a la universidad, al cumplimiento de esta exigencia, imposible de ser satisfecha a cabalidad. En efecto, algunos de los aspirantes no reúnen los requisitos académicos del caso, y otros han sido sancionados por el propio Consejo Universitario en términos tales que derogar la primera decisión significaría que el gobernador tendría capacidad para imponer otras determinaciones.

Además de la exigencia de una amnistía de verdad, la marcha planeada para realizarse mañana tiene el propósito de insistir en el aumento de la aportación del gobierno local al presupuesto universitario. Esta aportación está congelada desde hace más de dos años, lo que significa que ha sufrido una merma grave en términos reales. Eso genera un déficit creciente en la operación de las actividades universitarias, toda vez que existe el propósito de incrementarlas a tono con requerimientos de la población.

A ver si el autoritarismo del gobernador no impide la realización de la marcha.